**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Nº**

36

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución sobre la Política de Infraestructuras.**

Madrid, 16 de Julio de 2010

Fdo.: Soraya SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
Portavoz

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

Después de más de seis años de gobierno socialista se puede afirmar que la política de infraestructuras ha sido un auténtico fracaso; con carácter general, las infraestructuras de transporte se encuentran muy retrasadas.

Durante más de una legislatura y media, los únicos logros que ha realizado el Gobierno socialista han sido inaugurar y poner en servicio –con retrasos y numerosos problemas-, las obras que dejó en avanzado estado de construcción el Gobierno Popular, como por ejemplo: el AVE a Barcelona, el de Málaga, el de Valladolid, la nueva terminal T-4 del aeropuerto de Barajas, etc.

Se han dilapidado, por tanto, unos años de bonanza económica que hubieran resultado decisivos para culminar unas obras de transporte esenciales para situar a España en igualdad de oportunidades para competir con nuestros socios europeos.

La actual situación de crisis y el déficit económico que ha generado el Gobierno socialista por su propia irresponsabilidad a la hora de hacerle frente, no está ayudando a la consecución de unos objetivos mínimos en la política de infraestructuras, sino a todo lo contrario; retrasa aún más la puesta en servicio y la ejecución de lo que ya estaba previsto.

Se ha producido, en consecuencia, una paradójica situación en la que el Gobierno anuncia primero que saldremos de la crisis con más inversión pública en infraestructuras, mientras, la licitación media de 2009 ha descendido un 37% respecto del año anterior.

Es más, en los primeros cinco meses de 2010, la licitación de obra ha descendido una media del 15% respecto del año anterior. Es de esperar que la actual coyuntura haga que el porcentaje de licitación a final de este año sea del mismo orden o superior al de 2009.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

Los presupuestos generales de 2010 tampoco han ayudado a crear empleo y dinamizar la economía; fueron ampliamente criticados por ser irreales, además de favorecer claramente a determinados territorios en detrimento de otros.

A estos problemas hay que añadir, además, el recorte de gasto que debe asumir el Ministerio de Fomento, en particular, como consecuencia del Plan de Acción Inmediata 2010 que supuso un recorte de 1.760 millones de euros al presupuesto de Fomento.

Frente a ello, con prisas e improvisación, el 7 de abril de este año, el Presidente de Gobierno junto con el Ministro de Fomento anunció un Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), para contrarrestar el anterior recorte. Se trataba de un ambicioso plan para invertir 17.000 millones de € en dos años (2010 y 2011), en el que no se aporta ninguna información sobre las infraestructuras incluidas en el mismo, y se mantiene aún hoy en el silencio más absoluto.

En definitiva, el PEI es, como viene siendo costumbre en este Gobierno, un instrumento nacido de la invención rápida para disimular el fracaso de un modelo de desarrollo de infraestructuras que no ha sido capaz de llevar a buen término el responsable del Ministerio de Fomento de este Gobierno y que adolece de un análisis serio sobre la financiación de obra pública en el actual contexto de crisis económica.

El PEI no tiene nada de "extraordinario", puesto que lo que anuncia son obras ya previstas en la planificación ordinaria. Tampoco es un modelo de colaboración público-privada ya que no responde a un modelo concesional que traslada los riesgos inherentes al inversor privado. Se trata de una mezcla del modelo alemán o pago aplazado y el peaje en sombra o peaje por disponibilidad, donde se difiere a futuro el pago de la deuda generada.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

Sin embargo, después de este anuncio, el 12 de mayo, el Presidente de Gobierno, en su comparecencia sobre el Plan de Austeridad, volvió a anunciar un nuevo recorte en infraestructuras, esta vez de 6.045 millones de euros, que tiraba por tierra el anunciado PEI. El Ministro de Fomento, en su comparecencia para explicar el citado plan, no fue capaz de concretar el modelo de financiación público-privado que se proponía en el plan, ni tampoco precisar las obras que se verían afectadas por el último recorte.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Propuesta de Resolución:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- 1. Presentar en el plazo de un mes una propuesta de recortes de gasto en materia de infraestructuras que concrete los compromisos de austeridad anunciados por el Gobierno y que se someta a la aprobación por la Cámara. Dicha propuesta debe responder a criterios de racionalidad económica y de equidad territorial de manera que no afecten a obras prioritarias de probada rentabilidad económica.*
- 2. Proponer un Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) que dé prioridad de financiación a aquellas obras que incidan directamente en la recuperación de la actividad económica de una zona o del conjunto de España.*
- 3. Revisar el PEIT 2005-2020 con criterios de planificación e inversión realista dentro del contexto de crisis económica que atravesamos, intentando acortar al máximo el horizonte temporal situado en 2020.*
- 4. Proponer para ello, y a la luz de la vigente ley de concesiones, nuevos mecanismos de financiación público-privada para la promoción de nuevas infraestructuras de transporte.*

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

5. *Restablecer, como criterio general, que las infraestructuras de alta velocidad deben dedicarse al transporte de pasajeros, y que se fomente el transporte de mercancías a través de la mejora de la red convencional de ferrocarriles.*

6. *Hacer de la seguridad un criterio prioritario en la política de infraestructuras de transporte, tanto durante la ejecución de las obras, como en la utilización de las mismas. Mejorar las inspecciones de las aeronaves y la conservación de las carreteras haciendo especial hincapié en los programas de vialidad invernal.*

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°

37

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución sobre Financiación Local**.

Madrid, 16 de Julio de 2010

Fdo.: Soraya SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
Portavoz

CRA. DE SAN JERÓNIMO, 40 - 2º - 28071 - MADRID

TELF. 91 390 60 00 - EXTS. 6667, 6668, 6697, 6679 - FAX: 91 390 58 84

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma de la financiación y el gobierno local está pendiente desde que en noviembre del año 2004 la Federación Española de Municipios y Provincias aprobara la Carta de Vitoria, con motivo del 25 aniversario de los Ayuntamientos Democráticos, y demandara "un nuevo Estatuto del Gobierno Local", dentro de los principios de autonomía local contenidos en la Carta Europea de Autonomía Local, que contemplara, entre otras materias, el "ámbito competencial propio" de los municipios, provincias e islas y su conexión con los "medios adecuados para ejercitarlas".

Todo ello contenía un denominador común: la imperiosa necesidad de elaborar y aprobar una nueva legislación en materia de gobierno local, la adecuación de su financiación en función de las competencias asumidas y la necesidad de que este nuevo modelo de financiación de las Entidades Locales se realice de manera urgente y simultánea al de las Comunidades Autónomas.

No sólo no se ha llevado a cabo la reforma de la financiación local junto con la autonómica, sino que, pese a que ya está en vigor el nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, el Gobierno la sigue retrasando, tal y como refleja el anuncio del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial, de que antes de 2011 no habrá un nuevo modelo de financiación local.

Esta decisión del Ejecutivo es absolutamente injusta y pone en serio riesgo la capacidad de financiación de las competencias municipales y la prestación de los servicios públicos y esenciales que demandan los ciudadanos. Las haciendas locales están viéndose seriamente afectadas por el efecto de la crisis económica en la evolución de la recaudación y en el incremento de los gastos asociados al funcionamiento del Estado de bienestar en tiempos de crisis.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

Cualquier modificación de la normativa referida a la Administración Local debe orientarse a garantizar la Autonomía Local, a avanzar en la segunda descentralización, atribuyendo a las Corporaciones Locales las funciones, competencias y responsabilidades que mejor pueden gestionar en beneficio de los ciudadanos, a modernizar las instituciones, a resolver la prestación y financiación de los servicios impropiaamente gestionados por los entes locales, a la reorganización de las relaciones de cooperación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales, y a definir el modelo de financiación que les garantice el aumento de la participación en el gasto público global español.

La futura Ley Básica de Gobierno y Administración Local debe profundizar en una verdadera articulación política y competencial de los gobiernos locales dentro de la arquitectura territorial del Estado, convirtiéndose en un verdadero Estatuto Básico del Gobierno Local. Pero no será suficiente, si no viene acompañada de un nuevo modelo de financiación local, capaz de garantizar el correcto desarrollo de las administraciones locales españolas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente **Propuesta de Resolución:**

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Remitir a la Cámara, antes de que finalice el año, el Proyecto de la nueva Ley de Financiación Local, conjuntamente con el nuevo Proyecto de Ley Básica de Gobierno y Administración Local, que necesariamente ha de venir acompañada de la correspondiente memoria económica.
2. Poner en marcha, en el plazo de 30 días, la línea de crédito ICO directa, en condiciones preferentes, dirigida a las Entidades Locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010, como aprobó esta Cámara a través de la Ley de morosidad.

CRA. DE SAN JERÓNIMO, 40 – 2º - 28071 – MADRID

TELF. 91 390 60 00 – EXTS. 6667, 6668, 6697,6679 – FAX: 91 390 58 84

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°

38

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución para la defensa del Pacto de Toledo.**

Madrid, 16 de julio de 2010

Fdo.: Soraya SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
PORTAVOZ

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

EXPOSICION DE MOTIVOS

El conjunto de las fuerzas políticas suscribieron en 1995 el Pacto de Toledo, cuyas recomendaciones han orientado, sobre la base del máximo consenso político y social, las sucesivas reformas producidas en nuestro sistema de pensiones.

En 2003 se revisó dicho Pacto, valorando los resultados obtenidos en su aplicación e incorporando un nuevo conjunto de recomendaciones que siguen en vigor desde entonces.

El objetivo fundamental fue garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de Seguridad Social y facilitar su acomodo a las nuevas realidades económicas, sociales e institucionales de los últimos años.

El Pacto de Toledo se configuró en su día como una malla de protección social para los pensionistas españoles. Una red articulada de compromisos, consensos y acuerdos para el desarrollo del sistema de protección social en España. Había garantías explícitas de que sus recomendaciones debían ser cumplidas, con un notable espacio para que los Gobiernos sucesivos procedieran a su desarrollo. Se entendía que podía existir cierto grado de autonomía del Gobierno para fijar prioridades, para establecer la gradualidad en el cumplimiento, implantación y despliegue de las recomendaciones suscritas, pero existía el compromiso evidente de todos respecto al necesario cumplimiento de tal conjunto de recomendaciones.

La decisión del Gobierno de suspender la revalorización de las pensiones para el año 2011, mediante el Real Decreto-Ley 8/2010, incumple los contenidos de la recomendación undécima del Pacto de Toledo de 1995 y en mayor medida aún la recomendación segunda del Pacto de Toledo de 2003, que insta a

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y a consolidar eventuales ganancias de poder adquisitivo derivadas de desviaciones del IPC. Además, esta decisión implica un perjuicio notable para la confianza y credibilidad de los compromisos suscritos.

Es por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Propuesta de Resolución:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- a) *Cumplir las recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo, plenamente en vigor, para garantizar el necesario clima de confianza y lealtad que ha de presidir su eventual renovación.*
- b) *Preservar los principios de consenso político y social, imprescindibles para acometer las reformas necesarias de nuestro sistema de pensiones, en orden a adecuarlo a los retos demográficos y socio-económicos a los que ha de enfrentarse.*
- c) *En particular, restituir la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de los españoles, especialmente relevante en tiempos de crisis económica. A tal fin, el Gobierno adoptará las medidas alternativas de ahorro económico que permitan atender los objetivos de reducción del déficit público sin merma de la capacidad económica de los pensionistas españoles”.*

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

**PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°**

39

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución para la protección del Estado de Bienestar.**

Madrid, 16 de Julio de 2010

Fdo.: Soraya SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
Portavoz

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sistema de bienestar, gestado a finales del siglo XIX y desarrollado a lo largo del siglo XX, consolidó un sistema de protección social que contribuyó a garantizar un conjunto de prestaciones sociales al alcance de amplias capas de la sociedad, especialmente aquellas con más dificultades económicas. Así, favoreció que aquellos sectores más vulnerables a las crisis económicas y por tanto al desempleo, tuviesen asegurados, siquiera mínimamente, unos derechos que constituyen un sistema de protección ante las contingencias.

La naturaleza del Estado de Bienestar consiste en ofrecer algún tipo de protección a personas que, sin la ayuda del Estado, difícilmente podría ser obtenida. El Estado, por tanto, está obligado a garantizar determinadas prestaciones fundamentales, como la sanidad, la educación, las pensiones, servicios sociales, etc., que en el ordenamiento legal se estructuran a modo de derechos universales.

Por ello, el Estado de Bienestar es esencialmente fruto de un acuerdo político. Todos los partidos políticos somos conscientes de la necesidad de garantizar el Estado de Bienestar y los poderes públicos tienen el deber de garantizarlo y hacerlo de modo eficiente, especialmente en época de crisis.

Con la actual crisis económica, donde la caída de ingresos ha sido de un 15% en los dos últimos años y el déficit público ha alcanzado un 11,2% del PIB a finales de 2009 (frente al 2% de superávit del 2007), hemos podido observar como el Estado del Bienestar se ha resquebrajado debido a los recortes presupuestarios que ha llevado a cabo el Gobierno, que incluso habla de "hacer un paréntesis" o "podar el árbol".

El Gobierno ha tardado demasiado en reconocer la crisis y esto ha provocado la adopción de medidas drásticas que han acabado haciendo mella en nuestro

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

Estado del Bienestar. Si no se hubieran adoptado decisiones de gasto innecesario y gastos superfluos, y se hubieran hecho las reformas necesarias, no se hubieran tenido que congelar las pensiones, recortar las prestaciones por hijo a cargo, eliminar el "cheque bebé" o las compensaciones económicas que reciben las personas dependientes.

Cabe señalar, por añadidura, cómo a pesar de la grave situación de la financiación del sistema sanitario, el Gobierno también ha llevado a cabo recortes relevantes en este ámbito. La supuesta inyección adicional de recursos tras la Conferencia de Presidentes de 2005 y el actual modelo de financiación autonómica no han servido para dotar a la sanidad de una financiación necesaria, y ahora con estos nuevos recortes, se agrava todavía más el problema.

El Gobierno ha puesto casi todo el peso del recorte en el gasto farmacéutico, que representa tan sólo el 30% de la factura sanitaria, dejando de actuar sobre el 70% restante, a través de medidas que incidan en otros aspectos fundamentales, como el modelo de financiación, el modelo de gestión, la planificación de los recursos humanos o la extensión de la e-Sanidad (receta electrónica, historial electrónico, etc.) a todo el territorio.

El Presidente del Gobierno incumple su compromiso: "*Conmigo de presidente jamás habrá recortes sociales*". Así, este Gobierno no ha parado de decir desde el inicio de legislatura, hasta hace pocos meses, que no se producirían recortes sociales.

Ahora, el Gobierno realiza estos recortes de forma unilateral y mediante "decretazos", sin contar con el resto de fuerzas políticas, administraciones públicas afectadas o agentes sociales, desvirtuándose el principio de consenso político que debe regir en el Estado del Bienestar.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular considera necesario consensuar todas las reformas que afecten a nuestro Estado del Bienestar con el fin de garantizar su consolidación y sostenimiento al margen de las sucesivas crisis e incluso de la mala gestión económica, como la que representa el actual Gobierno. Se hace necesaria una red articulada de compromisos, consensos y acuerdos para el desarrollo del sistema de bienestar en España, como método para fortalecerlo y hacerlo eficaz y eficiente.

Es por ello que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente **Propuesta de Resolución:**

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a buscar y respetar los pactos necesarios para proteger el Estado del Bienestar, de manera que las futuras reformas, que afecten a los derechos sociales básicos de los ciudadanos, no se aborden de forma unilateral sin la participación de los grupos parlamentarios, los agentes sociales y todas las Administraciones Públicas afectadas, de forma similar a cómo el Pacto de Toledo se constituyó en relación con el sistema de pensiones".

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°

40

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución para el apoyo a las familias más necesitadas.**

Madrid, 16 de Julio de 2010

Fdo.: Soraya SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
Portavoz

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

EXPOSICION DE MOTIVOS

La protección económica por hijo a cargo consiste en un conjunto de medidas diversas dirigidas a compensar el coste económico que supone criar y educar a los hijos, así como evitar los posibles impactos negativos derivados de este coste en la renta familiar que implican un descenso en la calidad de vida de las familias.

En España se trata, a grandes rasgos, de un sistema de prestaciones familiares dirigido a familias con escasos recursos económicos, entendiéndose por tales a aquellas que demuestran una notable necesidad económica, como es el caso de familias con recursos inferiores a once mil euros anuales. Esto nos sitúa a la cola de Europa en la concesión de este tipo de ayudas.

El Real Decreto-Ley 8/2010 de Medidas extraordinarias para la reducción del déficit público introduce, dentro de las medidas de recorte presupuestario, las prestaciones por hijo a cargo, reduciendo las cuantías dirigidas a hijos menores de 3 años casi a la mitad, pasando de 500 euros anuales a 291 euros.

Un gobierno que predica ser social no puede reducir en un 42% la cuantía de esta prestación, que atiende fundamentalmente a personas que se encuentran próximas a la exclusión social. La crisis ha provocado que en el último año estas prestaciones hayan aumentado. En concreto, según datos del Ministerio de Trabajo, el número de familias con niños menores sin ninguna discapacidad que reciben la prestación de 500 euros anuales hasta que cumplen los tres años ascienden a 143.870. El coste anual de esta medida asciende a 66.334.596 euros y con el recorte que propone el Gobierno se ahorrarían tan sólo 27.860.530,32 euros.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

Por tanto, no parece razonable que, por el importe de la cuantía de ahorro que se realiza con la aplicación de esta medida, sean aquellos que menos recursos tienen, los que se vean afectados por los recortes aprobados por el Gobierno, cuando existen partidas presupuestarias que si se ajustaran convenientemente impedirían que este recorte se aplicase a personas que viven en el límite de la pobreza y la exclusión de social.

Por todo ello, Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente **Propuesta de Resolución:**

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales oportunas con el objeto de restablecer en la cuantía de 500 euros anuales las prestaciones por hijo a cargo para menores de tres años, que fueron recortadas por el artículo 7 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, tal y como se establecía en la redacción anterior del artículo 182 bis uno de la Ley General de la Seguridad Social”.

**GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO**

PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN N°

45

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución para que el Gobierno cumpla los mandatos del Congreso de los Diputados.**

Madrid, 16 de Julio de 2010

Fdo.: Soraya SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
Portavoz

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

Dotar al Parlamento de relevancia y protagonismo político ha sido siempre una de las promesas estrella del PSOE. En su programa electoral para las elecciones de 2004 se comprometía a “recuperar el papel central de las Cortes Generales, especialmente del Congreso de los Diputados, e impulsar su protagonismo en la vida política” y en el de 2008 apelaba a su consolidación “como el principal foro público en el que se contrasten las distintas alternativas políticas, facilitando el debate de los problemas que generan más inquietud a la ciudadanía y ofreciendo soluciones a los mismos.”

Sin embargo, como suele ocurrir con el Partido Socialista, estas promesas no han encontrado ningún reflejo en la actitud del Gobierno y, en particular, en su relación con las Cámaras. Todo lo contrario, el Gobierno se ha colocado en situación de primacía sobre el Parlamento, pervirtiendo con ello la equilibrada separación de poderes que recoge nuestra Constitución. De esta forma, el Gobierno socialista ha tratado de silenciar el papel del Parlamento en el debate político –a través del veto a aquellas propuestas que no le ha interesado someter a discusión- y ha hecho oídos sordos a sus mandatos –ignorando las obligaciones derivadas de las propuestas aprobadas por la Cámara -.

De hecho, en lo que va de legislatura, el Gobierno ha incumplido más de 25 iniciativas aprobadas por el pleno del Congreso de los Diputados a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, entre las que se incluyen asuntos tan trascendentes para nuestro país como permitir a PYMEs y autónomos no pagar IVA por las facturas no cobradas, reducir el número de altos cargos en el Gobierno, rectificar en la congelación de las pensiones o, más recientemente, aprobar un Plan Global frente a la Crisis.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

Es más, la ignorancia del Gobierno a la voluntad del Parlamento llega al extremo de que, a pesar de que son ya cinco las ocasiones en las que el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a reducir y racionalizar su estructura, el Ejecutivo no ha mostrado ninguna disposición a atender a este requerimiento.

Esta situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por el Grupo Parlamentario Popular, reivindicando el valor de las decisiones adoptadas en la Cámara, como expresión de la soberanía nacional en ella representada.

Es más, con fecha de 18 de mayo de 2010, el Congreso de los Diputados aprobó, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular que tenía por objeto poner en valor el papel del Parlamento, estableciendo una serie de garantías del cumplimiento por parte del Gobierno de las iniciativas aprobadas en la Cámara. En este sentido, se establece que, a partir de ahora, la Vicepresidenta Primera del Gobierno deberá comparecer al inicio de cada periodo de sesiones en la Comisión Constitucional para informar sobre el grado de cumplimiento de las iniciativas aprobadas, tanto en Pleno como en Comisión, previa remisión de un informe que será público y accesible a todos los ciudadanos a través de la página web del Congreso en el que se dará cuenta de forma singularizada del cumplimiento de cada una de ellas.

Sin embargo, los antecedentes del Gobierno en sus relaciones con la Cámaras y su reiterada tendencia a arrinconar el papel del Parlamento, hacen pensar que tampoco esta iniciativa, dirigida a garantizar el cumplimiento de todas las demás, sea tenida en cuenta por parte del Ejecutivo socialista.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

Por esta razón, el Grupo Parlamentario Popular quiere reiterar al Gobierno su obligación de cumplir con éste y con el resto de mandatos emanados del Parlamento, y quiere, para ello, concretar los términos en los que habrá de hacerlo de forma inmediata. Entendemos más necesario que nunca un compromiso por parte del Gobierno, en una situación en la que su propia credibilidad está severamente cuestionada y la calidad de nuestra democracia está expuesta a cada vez mayores ataques, y entendemos que el mejor modo de asumir este compromiso es en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación, por su importancia como balance público de la situación política y como origen, a su vez, de nuevos compromisos del Gobierno y nuevos mandatos parlamentarios. Creemos, en definitiva, que éste es el mejor modo de que los ciudadanos tengan la confianza y la certeza de que su Gobierno respeta y asume la voluntad popular cumpliendo las resoluciones del Parlamento en el que están representados.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente **Propuesta de Resolución:**

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- 1. Cumplir de forma efectiva los mandatos emanados de la voluntad mayoritaria de la Cámara, sea en forma de Propositiones no de Ley, aprobadas en Pleno o en Comisión, Mociones consecuencia de Interpelación o, especialmente, Resoluciones derivadas del Debate del Estado de la Nación, como condición imprescindible para garantizar la calidad de la democracia y la legitimidad del Gobierno.*

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

El Congreso de los Diputados acuerda:

1. *Que en la primera semana de cada periodo de sesiones se convoque de forma automática la comisión Constitucional con objeto de que la Vicepresidenta Primera del Gobierno informe sobre el grado de cumplimiento de estas iniciativas, previa remisión del correspondiente informe que deberá hacerse llegar a los grupos parlamentarios con la suficiente antelación, y en todo caso ser accesible a todos los ciudadanos a través de la Página web del Congreso.*
2. *Garantizar que estas comparecencias incluyan el grado de cumplimiento de las Propuestas de Resolución aprobadas con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, y cuantas Propositiones No de ley en Pleno y Comisión y Mociones hayan sido aprobadas en el periodo de referencia”.*